

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

16ª REUNIÓN
8º SESIÓN ESPECIAL

17 de junio de 2020

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

– En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de junio de 2020, siendo la hora 15 y 20:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 61 señores legisladores a la plataforma Zoom, lo que equivale a la presencia de un número de legisladores suficiente a los efectos del quórum, damos inicio a la 8º sesión especial y 6º virtual del 142º período ordinario de sesiones.

Invito a la legisladora Luciana Echevarría a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la legisladora Echevarría procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión especial anterior.

Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.

-3-

Sr. Presidente (Calvo).- Pongo en conocimiento del Cuerpo que la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, conforme a lo que autoriza el artículo 101 del Reglamento Interno, dio por aprobado el proyecto de resolución 30451/L/2020, tal cual ha sido informado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Me informan que todos los presidentes de bloque y autoridades de Cámara recibieron en su casilla de mail o en su dispositivo celular la siguiente documentación: decreto que cita a esta sesión, que equivale el Orden del Día; en segundo lugar, el proyecto de ley 30555/E/2020, que conforma el objeto de la presente sesión especial; en tercer lugar, los proyectos de declaración de adhesión y beneplácito, cuyos tratamientos han sido solicitados; en cuarto lugar, los proyectos de distintos bloques que pidieron su tratamiento sobre tablas en la reunión de Labor Parlamentaria que acaba de ocurrir. Omitiremos la lectura de la citada documentación, a la que incorporaremos al Diario de Sesiones.

Al igual que las sesiones anteriores, de manera virtual se va a considerar el voto del presidente o los voceros de cada uno de los bloques, equivalente al voto de todos los legisladores de cada bancada, y también vamos a poner en consideración en una misma votación, en general y en particular, el proyecto de ley que se tratará en esta sesión.

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso y tratamiento al despacho emitido respecto del proyecto 30555/E/2020, proyecto de ley adhiriendo a la Ley Nacional 27.548, que crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus, COVID-19.

Para dar inicio al tratamiento del presente proyecto, tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.

Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.

Me tomo unos minutos para agradecer la presencia en el día de ayer de los doctores Juan Ledesma, Diego Almada, Hugo Tangenti, Armando Andreu, Héctor Manzur con su equipo, doctores Hugo Martínez y Patricia Fernández, licenciada Mónica Lucero, Gerardo Beltramino y el abogado Federico Robledo, que tan amablemente vinieron a presentar el proyecto del cual hablaré.

Hoy venimos a adherir a la Ley nacional 27548, por el que se declara de interés prioritario la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud, de los trabajadores voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus, COVID-19, y se crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19.

El 18 de abril el COVID-19 se cobró la primera víctima en el campo sanitario en la Provincia de Buenos Aires: Silvio Cufre, de 47 años, enfermero del Instituto Médico Brandsen, quien estaba internado en el Hospital Regional Cuenca Alta de Cañuelas. Por este motivo, esta ley a la que venimos a adherir se la conoce como "Ley Silvio".

Los trabajadores de salud están la primera línea de la respuesta al brote de COVID-19. Como tales, están expuestos a situaciones de potencial exposición que los pone en riesgo de infección.

El Ministerio de Salud de la Nación ha informado que el 9,5 por ciento de los infectados obedece a un trabajador de la salud.

La infección en el personal de la salud se puede producir tanto a partir del contacto directo con pacientes como de manera horizontal entre trabajadores de la salud.

Nos encontramos en la crisis sanitaria más grave de nuestro tiempo. La pandemia nos recuerda la función vital que desempeña todo el personal sanitario. Todos los días los profesionales corren riesgos para aliviar sufrimientos y salvar vidas. Aprenden mientras trabajan con información que cambia día a día, a veces incluso hora a hora. Están en la primera línea de la lucha y también son los que más riesgos corren.

Cuando los profesionales de la salud quedan expuestos a una infección o se enferman, tienen que irse a sus casas y permanecer allí durante al menos quince días, y los hospitales tienen problemas para encontrar a quienes los reemplacen. Por ello, constituye una preocupación central por parte de la cartera

sanitaria la protección de todas las personas que se encuentran afectadas al abordaje de la pandemia, especialmente aquellos que desempeñan sus tareas en hospitales y operativos de salud, donde las medidas de bioseguridad, capacitación y uso adecuado de equipos de protección personal resulta central para prevenir cualquier tipo de contagio.

Desde hace 12 años la Provincia de Córdoba adhirió sus hospitales públicos, a través de sus respectivos comités de infecciones asociadas al cuidado de la salud, al Programa Vida, del Instituto Nacional de Epidemiología, y ha desarrollado una enorme experiencia en este campo para mitigar las infecciones.

En el marco de la pandemia, por Resolución 834/20, del Ministerio de Salud, se ha creado la Mesa de Bioseguridad del Personal de Salud del Centro de Operaciones de Emergencia interinstitucional y multidisciplinario, bajo la coordinación del Departamento de Seguridad de Pacientes, Control de Infecciones y Uso Racional de Antimicrobianos del Ministerio de Salud, con el objetivo de proteger la salud de los pacientes y del equipo de salud en el marco de la pandemia Covid.-19, garantizando herramientas y entrenamiento continuo en bioseguridad y uso seguro y racional de los elementos de protección personal, prevención y mitigación de eventos adversos hospitalarios y acompañamiento de los equipos de salud involucrados en la atención de los pacientes.

La sanción de la Ley 27.548 crea un programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del coronavirus Covid-19 con el fin de establecer conjuntamente protocolos de seguridad, guías de prácticas, dictar procedimientos de bioseguridad, garantizar el abastecimiento de insumos, la capacitación y todo el personal que preste servicios en esos establecimientos dedicados a la atención, generando inclusive un registro único del personal que ya está contagiado con el coronavirus, hacer un seguimiento, evolución y analizar cada caso en particular.

Si hasta ahora podemos hablar de que hemos tenido resultados positivos en la lucha contra esta pandemia, en términos de la cantidad de infectados fallecidos con respecto a otras provincias, y si logramos el aplanamiento de la curva, ello se debe al accionar del Gobierno provincial, al compromiso de todo el pueblo cordobés y a la labor incansable de esos trabajadoras y trabajadores que brindan diariamente su esfuerzo.

Como decíamos antes, ellas y ellos son quienes se exponen para lograr contener el avance del coronavirus, son quienes cumplen con responsabilidad en situaciones a veces de exigencia, con la presión que eso implica, el temor a contagiarse a cada paso, poniendo en riesgo su vida y la de su familia con el objetivo de proteger al resto de la población.

Por eso es que, en tal sentido, de allí viene esta ley, ya que también es responsabilidad del Estado garantizar que puedan cumplir con su trabajo en las condiciones de mayor seguridad posible, tarea de la que se viene ocupando desde el principio este Gobierno provincial. Esta emergencia nos ha puesto a prueba como sociedad, y entre tantas incertidumbres y desafíos diarios que plantea este virus desconocido, podemos afirmar que la certeza más concluyente que encontramos está en los valores y en la actitud de nuestro capital humano.

La Provincia de Córdoba está activa, preparada y coordinada. El Gobierno está trabajando día y noche para seguir dando la mejor respuesta posible desde su estructura institucional, pero hay que señalar que no habría estrategia que

podiera resultar si el personal de Salud no estuviera haciendo su mejor esfuerzo en el territorio. Por eso, en mérito en cuanto logro favorable haya que mencionar, por supuesto que les corresponde.

El virus ha demostrado ser implacable frente a cualquier error, lo que ha obligado al Gobierno provincial a asumir el enorme desafío de adecuar al sistema de salud en muy poco tiempo para darle la mayor capacidad de respuesta posible.

La Provincia de Córdoba tuvo una ventaja comparativa que implica haber invertido fuertemente en infraestructura hospitalaria, en centros de salud y en equipamientos médicos.

Queda mucho trabajo por realizar y quedan muchos días de combate, y es necesario que sigamos trabajando en equipo y haciendo bien las cosas, cada uno desde su lugar.

Por eso, señor presidente, considero imprescindible que este proyecto se convierta en ley, para reportar los beneficios para las personas abocadas al abordaje de la pandemia, su familia y toda la comunidad.

Sólo me resta agradecer y celebrar la alta responsabilidad cívica de todos los legisladores.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.

Continúa en el orden del uso de la palabra la legisladora María Rosa Marcone.

Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.

Nuestro bloque va a acompañar esta ley, ya que sería infantil decir que no estamos de acuerdo en que se proteja a los equipos de salud, en que se elaboren los protocolos convenientes para su protección pero, la verdad es que de la reunión de ayer me surgieron muchas dudas, me quedaron muchas dudas.

A la Comisión de Salud vino una comitiva compuesta por –como bien dijo la legisladora informante- diez miembros del COE y del Servicio de Salud de la Provincia, diez personas y, entre ellos, el Coordinador General del COE, el Jefe de División de la gestión de calidad en servicios hospitalarios, el miembro del Comité Externo de Medicamentos de Uso Compasivo, el Jefe de Departamento de Seguridad del Paciente y control de infecciones de uso racional antimicrobiano; bueno, podría seguir nombrándolos a todos, pero lo que quiero destacar es que eran todos funcionarios de alto rango y que suponemos que tienen tareas importantes que cumplir; vinieron a la Comisión para mostrarnos un Power Point con seis diapositivas que poco y nada tenían que ver con el tema de la ley; nos mostraron listas de chequeos, nos contaron la cantidad de inspecciones que

habían hecho, pero nada se nos dijo sobre la situación que está pasando el sistema de salud público y privado de la Provincia en relación a contar o no con los elementos de protección necesarios, ni la realidad sobre cómo se están cumpliendo realmente los protocolos.

En este punto, solamente en la diapositiva número cuatro nos mostraron que aparentemente, por las inspecciones que han realizado, la mayoría de los centros de salud lo tienen claro.

Pero, cuando formulé preguntas –creo que fui la única que formuló preguntas-, no recibí ninguna respuesta satisfactoria.

Se insistió mucho en cómo la existencia de eventos desafortunados tenía que ser tratada no desde una mirada punitiva, sino desde una mirada de corrección del error y de permitir aprender de él.

Respecto a eso pregunté qué pasaba, por qué se había tomado, entonces, la decisión de imputar a dos médicos por un evento no querido, no deseado, del cual no teníamos datos para suponer que había una mala intención. No recibí una respuesta, se repitió lo mismo que se había dicho al principio.

Después, específicamente respecto a la ley, pregunté cómo se iba a financiar, si el hecho de que se adhiriera a la ley nacional era, justamente, para recibir fondos de Nación. Me dijeron que no, que se iba a atender con los fondos que se han destinado a la atención del COVID; pero, me quedó la duda.

Ustedes saben que nuestro bloque estudia mucho los fondos y la manera en que los manejan quienes los tienen que ejecutar.

Estuve buscando algunos datos que me puedan ilustrar sobre cómo se está manejando todo esto, y encuentro que el Hospital Nuevo San Roque, durante este año 2020, en plena pandemia, ha ejecutado sólo el 30 por ciento del total de lo que tiene asignado -la mayor parte en pago al personal. Pero, por ejemplo, en Medicamentos ejecutó sólo el 36 por ciento y pagó menos del 60 por ciento; el Centro Psicoasistencial tiene ejecutado un 19 por ciento; el Programa de Protección Integral a las Personas con Discapacidad ejecutó el 26 por ciento, y de eso pagó nada más que la mitad; para desarrollo de infraestructura y equipamiento hospitalario, un programa que nos parece central, justamente, para poder aplicar correctamente los protocolos de aislamiento en la atención de las personas que tienen COVID, las que no lo tienen, de las que se sospecha que puedan tener y de aquellos que van por patologías distintas, solamente ejecutó el 12 por ciento y, de eso, pagó el 40 por ciento.

El Hospital Neuropsiquiátrico provincial ejecutó el 30 por ciento. Acá, lo mismo que en los Centros de Atención Primaria de la Salud –los CAPS-, que también ejecutaron sólo el 32 por ciento, hay casi un 90 por ciento pagado, porque lo único que se ha ejecutado, en lo único que se han puesto fondos del Estado es en personal. Fíjense que, de los 96 millones que ejecutaron los CAPS, 89 millones corresponden a pago de personal permanente y no permanente; quiere decir que

no están teniendo ningún tipo de insumos, no se está ejecutando nada de lo que necesitarían para que realmente brinden una atención que permita que no colapsen los centros que tienen que dedicarse, según ese esquema que nos mostraron en su momento, exclusivamente a la atención de los enfermos de COVID.

Lo que más nos llama la atención, porque repetidas veces hemos visto que se ha inaugurado, repetidas veces hemos escuchado que en pocos días estaría activo y que iba a ser un centro muy importante para derivar a los pacientes, es el gasto en el Hospital Elpidio Torres.

Este programa tiene una asignación presupuestaria de 357 millones de pesos; solamente devengó 54.800 pesos, o sea, menos del 1 por ciento; y de esos 54.800 pesos, de los 357 millones de pesos, solamente pagó nada, no pagó nada.

O sea, estamos sancionando una ley que creemos que va a ser beneficiosa. Nos preocupa lo que llamamos “una baja calidad legislativa”; discúlpennos que lo diga así, puede sonar un poco chocante, pero, en verdad, es una ley que deja todo para que lo decida la reglamentación.

Ayer señalé, también, que la ley nacional no deja absolutamente claro quiénes son los que están alcanzados por esta ley, hay allí algunos actores que no están claramente definidos.

Realmente, nos preocupa que la ley provincial tenga solamente dos o tres artículos; uno en el que adhiere; otro en el que marca el alcance; y otro en el que fija la autoridad de aplicación. Una autoridad de aplicación que cuando tiene que gestionar el presupuesto asignado para atender la salud de los cordobeses lo maneja de la manera que estamos viendo.

Hoy hablábamos, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, respecto del pago del bono que debió haber recibido el personal de Salud; bono que venía de la Nación y que no fue pagado a todos los que están contemplados dentro de ese decreto nacional. La Provincia ha salido con una resolución, por la cual va a asumir el pago de eso que no se entregó, pero sin hacer ningún tipo de autocrítica, ni ver por qué razón quedaron fuera del pago cuando, simplemente, la Nación, a través de una resolución del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, había fijado muy claramente la manera en que había que hacer la presentación.

Nos preocupa cómo se va a aplicar esta ley, que consideramos necesaria y por eso votamos a favor de ella, en una Provincia en la cual en los hechos, en las efectividades conducentes, se nota una conducta tan errática y que tiene tan poco presente al beneficiario que, en definitiva, es el pueblo cordobés que se acerca a los hospitales.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.

Lo primero que tenemos que decir es que esta ley llega bastante tarde. Han pasado tres meses, si tomamos en cuenta la cuarentena, pero la pandemia está desde antes. Ese valioso tiempo perdido es un tiempo que no se recupera.

Se nos ha dicho en el informe, en la reunión de la comisión de ayer, que durante todo este tiempo se ha venido haciendo en la provincia todo lo necesario para cuidar a vida y la salud de los trabajadores. En ese marco, en verdad, parecería que la adhesión a esta ley sería una mera formalidad. Y este es el primer error que cometen, parten de un diagnóstico equivocado.

Como dije en otra oportunidad, Córdoba tiene una de las tasas de contagios del personal de la Salud más alta, no sólo del país sino del mundo. Deberíamos preguntarnos por qué.

Por ende, esta ley no debiera ser tomada como la continuidad del curso del Gobierno provincial sino, por el contrario, como un cambio profundo en las políticas de protección y cuidado de quienes nos cuidan.

El oportunismo político siempre es peligroso, pero cuando está en juego la vida de los trabajadores lo es mucho más. En verdad, lo que están haciendo con esta ley es lavarse la cara porque, claramente, para este Gobierno no es una prioridad la vida de los trabajadores.

Lo digo porque desde el primer día de la cuarentena hemos presentado distintas iniciativas que sí estaban orientadas por esta prioridad, y ustedes les dieron la espalda.

Presentamos la Ley de Emergencia Sanitaria, que partía de destinar una partida presupuestaria extraordinaria, financiada con un impuesto a las grandes fortunas, que incluía la declaración de utilidad pública del sistema privado de Salud para poder poner todos esos recursos al servicio de la Salud Pública; además, establecía la incorporación de insumos, equipamiento, y personal en condiciones dignas de trabajo, y planteaba la conformación de comités de emergencias multidisciplinarios donde los trabajadores de los hospitales tuvieran verdadero protagonismo. Pero eso también fue rechazado y le dieron la espalda desde el oficialismo.

Presentamos una ley para que se declare al personal de la Salud recurso humano crítico, compensando salarialmente el enorme esfuerzo que vienen haciendo, y no sólo les dieron la espalda sino que, por el contrario, han agravado las condiciones muy precarias de trabajo de estas personas, con paritarias a la baja y metiendo, en plena pandemia, un ajuste jubilatorio que también los afecta directamente.

Nunca fue para ustedes una prioridad la vida de estos trabajadores, ni con la pandemia, ni mucho menos antes. Entonces, como dijimos y denunciemos varias veces, hoy, quienes están en la primera línea son trabajadores pobres.

Yendo al proyecto concreto que se está tratando hoy, adelanto que voy a acompañarlo en general, porque tiene puntos positivos que me parecen importantes para avanzar; pero, en la votación en particular voy a rechazar el artículo 3º, porque no acuerdo con que la autoridad de aplicación sea sólo el Ministerio de Salud, que ha dado sobradas muestras de desprecio a los trabajadores que, justamente, son el objeto de esta ley.

No sé por qué deberíamos pensar que van a cuidar la salud y la vida de estos trabajadores, cuando no han hecho otra cosa que maltratarlos durante todo este tiempo. Por ejemplo, se obliga a quienes son grupo de riesgo a seguir trabajando, no se les respetan las licencias; se persigue y hostiga a quienes luchan por sus derechos, como ha pasado con los delegados del Hospital San Roque; e, incluso, en esta provincia se ha llegado al punto de criminalizar e imputar a médicos por infectarse, como es el caso de Lucas Figueroa.

Entonces, entendemos que sólo una comisión de trabajadores de la Salud y de sus representantes gremiales es la que puede encargarse de que esta ley no sea papel mojado y que pueda, realmente, garantizarse el cuidado verdadero de sus condiciones de vida, de las de sus familias y de la población en general.

Volvemos a insistir en que, si realmente quieren cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la Salud, empiecen por lo básico, que tiene que ver con pagarles un salario que les permita llegar a fin de mes, para que no tengan que tener dos, tres y hasta cuatro trabajos para poder subsistir.

Como dijimos, el pluriempleo es una constante en los trabajadores y trabajadoras de la Salud, lo que multiplica las posibilidades de contagio; por eso, desde la UTS se viene reclamando para que no sólo se refuercen las medidas de seguridad y se apliquen testeos masivos, sino que también se otorguen las licencias para poder trabajar en una sola institución.

Vuelvo a decir que, por una vez, escuchen a los que saben y a los que hacen, con imposturas oportunistas no van a salvar ni a la Salud Pública ni la vida de los trabajadores.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.

Se deja constancia del voto negativo al artículo 3º del presente proyecto de ley.

Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.

Sra. Díaz García.- Muchas gracias, señor presidente.

Pareciera que lo que se está por votar aquí no tendría ningún sentido de ser porque, efectivamente, no necesitamos una nueva ley, ni a nivel nacional ni en nuestra Provincia, para proteger a los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de lucha contra la pandemia de coronavirus.

Todo lo que está establecido en esta ley que estamos por votar se desgajaría de cualquier normativa vigente que tenemos en la actualidad. Sin embargo, se presenta como una novedad, se presentan, el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales que adhieren, como muy preocupados por la situación que enfrentan los trabajadores.

Ahora bien, hay un punto central que aborda esta ley y que, por supuesto, es la razón por la que no nos vamos a oponer, que son los testeos masivos, los testeos sistemáticos al personal de salud que no es un reclamo nuevo, los trabajadores lo vienen demandando desde el minuto uno en el que se dictó la cuarentena. Es un problema gravísimo. La Provincia y el país tiene el puesto número 1, a nivel nacional, de trabajadores contagiados con el virus por la falta no solamente de testeos masivos sino de las condiciones elementales de trabajo, de los insumos críticos, de los elementos de protección personal. Y frente a esta situación, tenemos que decir que de lo que aquí se trata no es de una negligencia, ni de una falta de responsabilidad por parte del personal sino, fundamentalmente, de la negligencia estatal y patronal en las clínicas privadas, que todos los gobiernos han presentado tratando de endilgarle la responsabilidad y resulta que en la Provincia de Córdoba tenemos el caso del geriátrico de Saldán, que ya lleva en su lista varias muertes a causa del contagio que se propagó; tenemos el caso de la clínica del Hospital Italiano, privada, en la que también se propagó el virus y se tuvo que cerrar la institución. Se ha cuestionado y se ha puesto en riesgo no solamente la salud de la población, sino también el plantel necesario de profesionales para atender a la población de nuestra Provincia, y recién ahora resulta que la Provincia y el Gobierno nacional deciden establecer un debate al respecto de esta situación.

Lo primero que tienen que hacer es hacerse cargo, decir que son responsables, dejar de tener esa política que lo único que ha hecho es perseguir e imputar a los trabajadores, como ha ocurrido con el caso del médico Lucas Figueroa, del cual hemos presentado un repudio en esta Legislatura y ha sido rechazado, no se ha discutido.

¿Por qué no plantean cómo se manipula la información con respecto a los contagios, lo que recientemente ha ocurrido en el Hospital del Sur?, en el que toda una comitiva de este Gobierno provincial con el COE ha ido a hacer una propaganda oficialista, mientras se les esconde la información de los contagios al propio hospital, al propio personal del hospital y a los propios vecinos de la zona que han salido a repudiar esta situación.

Por eso, no solamente decimos que se trata de una impostura, sino también del carácter distractivo de esta ley, es distraccionista, no aborda los problemas fundamentales, es el problema del salario, de que hace dos meses que este decreto nacional ha establecido que los trabajadores cobren un bono estímulo y que recién ahora están cobrando la primera cuota, incluso discriminando a algunos sectores de la salud. Tenemos la situación de los trabajadores que tienen que salir de un trabajo e ir a otro para poder llegar a fin de mes y ninguna condición de bioseguridad, el multiempleo en nuestra Provincia, en relación al personal hospitalario; no se dice una sola palabra respecto a eso. Es distraccionista, es una impostura, y el problema más grave de esta impostura, que seguramente ha sido la condición para que se apruebe a nivel nacional, es que no se destina una partida presupuestaria especial, sino que lo que van a hacer es una reasignación de recursos, y resulta que ahora van a ver de qué manera las provincias se garantizan los testeos, el cumplimiento y el monitoreo de las condiciones de bioseguridad para los trabajadores. ¿Por qué? Porque la plata sigue yendo al pago de la deuda externa.

Por supuesto, desde el Frente de Izquierda –ya lo adelanté– no vamos a oponernos y vamos a acompañar este proyecto de ley con todas estas reservas, pero vamos a dejar sentado, una vez más, que el único plan viable para revertir esta situación, para poder atravesar una pandemia de coronavirus, satisfaciendo las necesidades de las mayorías trabajadoras, es la centralización del sistema sanitario, que involucra a los sistemas público y privado y a las obras sociales. Ese proyecto de ley se mantiene todavía sin discusión en esta Legislatura, y desde el Frente de Izquierda reclamamos su debate, tratamiento y aprobación inmediata.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: antes de abordar esta cuestión, quiero expresar mi agradecimiento especial al personal de salud, a todos los equipos de salud que están trabajando fuertemente, arriesgando su vida y su salud en cada testeo, en cada acto médico y en cada atención a los pacientes.

Quiero agradecer a todas las personas que, voluntariamente, también se han sumado para ayudar a la gente, y destacar todas las muestras de solidaridad que están existiendo en esta pandemia.

También quiero agradecer a las Fuerzas Armadas de la Nación, que las veo diariamente, en toda la geografía del país, brindar su ayuda indispensable a través de su sistema logístico.

Quiero agradecerles también a los representantes del COE. No puedo poner en duda que toda esa gente está poniendo lo mejor de sí para que este

virus no nos haga más daño. Hay que ser fuertemente agradecidos con las personas que se levantan todas las mañanas para ponerle el pecho a semejante situación.

Nosotros –como dijo la señora presidenta de nuestro bloque– vamos a acompañar este proyecto. Viéndolo detenidamente, consiste simplemente en estratificar legalmente algunas normas que ya están en los protocolos de salud que estamos usando; muchos vienen sugeridos por la experiencia, otros vienen sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. En fin, se trata de darle un fundamento legal más fuerte a algo que ya de hecho se está haciendo, puesto que una cosa es que al sistema de salud no le respeten los protocolos, y otra cosa – acá viene la ventaja legal que este proyecto tiene para los médicos– es que no se respeten las leyes que han resumido la experiencia de los protocolos.

Entonces, evidentemente, esta ley es más protectora que lo que había hasta hoy, porque los médicos se movían solamente con indicaciones protocolarias que venían de los COE, pero ahora habrá una ley que les dará un fundamento básico a normas que no pueden dejar de aplicarse en el marco de esta pandemia.

Todo lo que hasta aquí hemos tratado de encontrar es, en definitiva, la parte llena y la parte vacía del vaso. Esto, para la mitad llena del vaso, es un gesto más para apoyar a nuestros trabajadores del COE y a toda la gente que está prestando su colaboración.

Le preguntaron una vez al general de Gaulle –presidente de Francia– para qué servían las Fuerzas Armadas, y se equivocó al decir que, en realidad, no sirven para nada, salvo un día en que todo depende de ellas. Claro, de Gaulle nunca imaginó que muchos años después vendría una pandemia y las Fuerzas Armadas iban a tener que sumarse al esfuerzo de darle de comer a la gente y ordenar algunos servicios.

Parafraseando lo que dijo de Gaulle, ahora sí todos nos hemos dado cuenta para qué sirve un sistema de salud al que nunca le hemos dado la importancia que tiene. Y esto es una constante, no es de los últimos años, aunque dicen los que son más grandes que yo que la medicina pública de Córdoba y de nuestro país ha tenido mejores tiempos.

La pandemia nos va a depositar en una “nueva normalidad”, como dicen. Pero no puede ser que todo lo que nos ha hecho madurar la pandemia en los temas sanitarios se pierda. Debemos fortalecer esta convicción que nos queda de lo importante, de lo patriótico, de lo heroico de los trabajadores de la salud.

No puedo olvidar la frase de los médicos entre tantos problemas que hemos tenido: “no somos héroes ni villanos, somos simplemente médicos”. Y los atacaban de un lado y los apoyaban del otro. Incluso, acá se ha hablado sobre la imputación judicial a médicos que es algo que nunca se entenderá.

No podemos salir de ésta sin aprender algo. Y entre lo que tenemos que aprender es la vigorización de nuestro sistema de salud público y su integración con el sistema privado.

Mire, señor presidente, cuando entré a esta Legislatura hace mucho tiempo, ya demasiado, en 2011, la primera ley que me pusieron al frente para aprobar suspendía por un tiempo el enganche con el Poder Judicial. Cuando vi esa ley pensé que Córdoba no es la Capital Federal, no puede pagar estos salarios y también pensé los problemas que iba a ocasionar ese sistema. Entonces, presenté un proyecto de ley sobre la rejerarquización de los servidores públicos. Al gobernador se le establecía un sueldo discreto y de allí que se cumpliera la Constitución y que nadie pudiera cobrar más que él; y para todos los cabezas de poder era lo mismo. Entonces, había una bajada de muchos sectores de la Administración Pública hacia abajo y había una rejerarquización del sistema de salud y de los educadores. Eso es lo que hay que hacer y esta es la oportunidad porque ahora, por la magnitud del problema que tenemos, el Gobernador se bajó el sueldo y muchos sectores hicieron lo mismo. Entonces, éste es el momento para hacer esa rejerarquización.

Como han dicho las legisladoras que me precedieron en el uso de la palabra, si hubiera una adhesión donde el tiempo de los profesionales de la Salud pudiera ser más redituable para llevar dignamente el pan a su casa, obviamente, eso reduciría el pluriempleo, daría más posibilidades laborales a los nuevos profesionales y enfermeros, en fin, tendría un efecto multiplicador.

¿Qué esperamos para rejerarquizar? Un jefe de servicio -por eso hay que meditar estas cosas- de la provincia de Córdoba, con cuarenta años de antigüedad, se jubila con 80 mil pesos; de ahí para abajo -lo he preguntado esta mañana-, usted, vaya viendo cómo se va estratificando el sistema, porque no todo el mundo se jubila como jefe de servicio, que es una altísima responsabilidad en el Sistema de Salud Público.

La pandemia nos tiene que servir, es un barajar y dar de nuevo, para rejerarquizar al Sistema de Salud; no pueden los médicos estar trabajando tres horas en un lado, cuatro horas en otro, cinco horas en otro, no pueden, y menos cuando hay presencia de virus de esta magnitud; tienen que tener un trabajo y hay que pagarles lo que realmente corresponde, y el Estado es el primero que tiene que hacerlo.

Cuando entremos a la nueva normalidad, los equipos de Salud y los educadores deben ser los más beneficiados. Córdoba tiene tradición en eso, una tradición un poco lejana. Los habitantes que vivieron antes de que llegaran las razas europeas aquí eran de la cultura kâmîare. ¿Saben quiénes gobernaban la cultura kâmîare, mal llamados comechingones?, los educadores. La cultura kâmîare privilegiaba el rol del educador, de aquel que le enseñaba al más joven.

Nosotros queremos que se termine la precarización en los servicios de Salud. Tenemos médicos y enfermeros heroicos, pero no por la pandemia, los

tenemos porque quién no ha conocido el esfuerzo y la responsabilidad de médicos y enfermeros del Sistema de Salud de la Provincia de Córdoba, aun con pocos elementos.

Usted preguntará por qué lo he conocido, si tiene DASPU. ¿Sabe por qué lo conocí?, porque durante veintidós años llevé y acompañé -como presidente del Portal de Belén- al Sistema de Salud Pública a mujeres que iban a dar a luz, y las chicas que iban a este sistema nos contaban los aciertos y los errores del sistema; y, entre los aciertos, aparecían muchas doctoras como Nilda Gait, gente que actúa con mucha responsabilidad en el sistema.

Debemos fortalecer el sistema, pero no atacarlo; mostrar la otra parte del sistema. El Gobierno gasta mucho dinero en publicidad -demasiado para mi gusto-, pero muestra la mitad del vaso lleno. Hay una mitad del vaso vacío del Sistema de Salud, que todos conocemos.

La espera en los turnos es de tiempo inmemorial, sé que se hacen esfuerzos por resolverlo, pero la espera de turnos, en algunas enfermedades, puede significar un problema muy grave para determinar diagnósticos.

Se debe agilizar todo lo que se pueda la provisión de medicamentos y prótesis. Ustedes me dirán: “doctor, se logra”, pero hasta por ahí nomás porque, si no, no vendría la gente a la Legislatura a pedirnos una intervención. A mí siempre me la piden acá, viene alguien y me dice: “doctor, he pedido una prótesis.”

Hay un sistema protocolario de la Provincia; sé que se hace, pero a veces no se hace porque los proveedores no entregan en tiempo, o el producto falta, pero hay que agilizar los diagnósticos.

En materia oncológica, un diagnóstico lerdo es muy grave. Una vez me tomé el trabajo, por una chica que tenía cáncer, de averiguar cuánto tiempo se demoraba desde que la chica hacía la primera consulta hasta la operación, la cirugía, etcétera, todo el proceso; si el médico original erraba en el diagnóstico y no le prestaba atención, muchas veces, no había una segunda oportunidad para la persona. Eso también pasa en la medicina privada, yo no lo descarto, pero todo lo que se pueda avanzar en eso es poco.

Nosotros creemos que esta es una oportunidad excelente, esta oportunidad de la pandemia. Yo tengo 66 años y nunca vi lo que sucedió con la marcha automovilística de los médicos, a eso nunca lo vi en Córdoba. Ese era un mensaje a lo profundo de la sociedad cordobesa, porque ahí estábamos interpelados todos; a su manera, todos estábamos interpelados.

Vamos a apoyar esta ley, pero no queremos que todo siga igual.

Se gasta mucho dinero, y se gasta mal. No quiero abusar del tiempo que se nos ha dado. Vengo del Hospital de Villa Dolores y del nunca del todo terminado Hospital de Río Tercero, tengo anotado con cuánta plata empezaron a hacerse esas obras, que tenían un plazo de ejecución, para las que había un crédito -

supongo que estaba el Banco Bilbao y la empresa Eductrade, de los españoles, de triste fama en toda América Latina, con problemas en Paraguay, Uruguay, una empresa que es un buque insignia de capitales españoles para hacer obras en América Latina. Veo con cuánto arrancaban esas obras y cuánto nos van a costar; obras que se deberían haber terminado hace mucho tiempo y que el Gobernador, el 6 de abril, dijo que se van a retomar. No sabemos si a la plata la terminaron de cobrar o no.

Apoyamos la ley, apoyamos a los médicos del Sistema de Salud, apoyamos a las enfermeras del Sistema de Salud, apoyamos a los enfermeros del Sistema de Salud, pero todo no puede seguir igual cuando salgamos de esto, señor presidente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.

Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar, en primera instancia, nuestro apoyo a este proyecto de ley 30555/E/20, que adhiere a la Ley nacional 27.548, del Programa de Protección al Personal de Salud.

Quiero, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, hacer, en primer término, un reconocimiento a Silvio Cufre, aquel enfermero que falleció en abril del corriente año, estando frente a la pandemia y haciendo un trabajo enorme para defendernos a todos los argentinos -él en la Provincia de Buenos Aires- y que terminara dándole nombre a esta ley, Ley Silvio.

En segundo término, el homenaje y el reconocimiento del bloque de la Unión Cívica Radical a un sector que está integrado por médicos, enfermeras y enfermeros, efectores del sector de la Salud que están todos los días al frente del combate contra la pandemia, que desde el primer día están arriesgando sus vidas, las de sus familiares y de sus amigos por defendernos a todas y todos los argentinos. Va, por supuesto, el reconocimiento del bloque de legisladores a ese sector social que es trascendente e importante y que, como digo, está al frente de la pandemia.

También, quiero decir que, por supuesto, estamos de acuerdo con este Programa Provincial de Protección de Salud ante la Pandemia del Coronavirus que, como decían los legisladores preopinantes, ojalá sirva para darle una herramienta más a este sector que, como dije, ha dado su vida en defensa de todos los argentinos.

También, quiero señalar y resaltar que, seguramente, muchas veces se habrán sentido maltratados y desprotegidos; son sectores –incluidos los médicos– que tienen salarios bajos, que tienen pluriempleo para poder llegar con sueldos acordes a su dignidad; están precarizados laboralmente y, en muchos casos, deben haber sentido que el Estado no los protegía frente a esa imputación que recibieron dos médicos y que generó esa enorme movilización en rechazo a esa imputación que hacía un fiscal que, por supuesto, con la cobertura de parte del Poder Judicial, había sido enviado, seguramente desde las esferas del poder político, a callar trabajadores y a callar a todos los que se manifestaban en contra de un sistema que, por ahí, los maltrataba, como en el caso de las dos imputaciones. Estaban al frente de la pandemia, pero recibían, como contrapartida, de uno de los poderes del Estado, un cachetazo a lo que estaban haciendo y a esa dedicación que venían a imprimir.

Es un proyecto que defiende la vida, la salud de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y enfermeros, de los que están en la dirección y administración de los hospitales, del personal de logística, del personal de limpieza. Bueno, a todos, por supuesto, mi homenaje, nuestro homenaje como bloque de la Unión Cívica Radical.

Lo que queremos dejar señalado es que después de que termine esta pandemia no vamos a ser los mismos; tenemos que tratar de reorganizar el Sistema de Salud; tenemos que tratar de generar una pirámide distinta en materia salarial. Esta pandemia ha demostrado que estos sectores sociales están muy mal pagos, que a la vocación que tienen, y que han demostrado de manera suficiente, hay que llevarles también una salida y una solución laboral. Seguramente, reconocemos esa vocación, pero toda vocación tiene que ir acompañada de un aggiornamiento salarial y un mejoramiento de salarios para estos sectores de la Salud.

Muchas gracias. Como dije al principio, acompañamos este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Calvo).– Muchas gracias, señor legislador.

Tiene la palabra la legisladora Elisa Caffaratti.

Sra. Caffaratti.– Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero adelantar el voto positivo del bloque Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento.

La denominada Ley Silvio, como ya se ha dicho, a la que hoy adherimos, rinde homenaje al enfermero Silvio Cufre, fallecido por COVID-19, en la Provincia de Buenos Aires.

Silvio era sostén de familia, de sus cuatro hijos y dos sobrinos; con 48 años, encontró la muerte sin nunca saber que la persona a quien le brindaba sus cuidados era sospechoso de COVID.

Enterados del caso positivo de Silvio, en el barrio hubo muchas personas que lo amenazaron, incluso con quemarle la casa si no se mudaba; lo acusaron de haber llevado el coronavirus al barrio.

Trágicamente, señor presidente, Silvio representa a miles y miles de trabajadores de la Salud que hoy están al frente de esta pandemia, poniendo en riesgo su propia vida, corriendo de una institución a otra para llegar a fin de mes, en algunos casos víctimas de hechos violentos o discriminatorios, y muchas veces sin las herramientas que les permitan ejercer su profesión con las medidas de seguridad adecuadas.

Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en su informe “Actualización sobre la situación del personal de salud y la enfermedad COVID-19”, de fecha 6 de mayo, los casos confirmados de COVID-19 del personal de Salud son 863 en el territorio nacional, entre los cuales hay 9 fallecidos.

En nuestra Provincia, y según el reporte de casos del COE, al 15 de junio, son 83 los trabajadores de la Salud que se han enfermado con COVID-19, y en el 68,67 por ciento de los casos el origen de este contagio se dio en un centro de salud. Si tenemos en cuenta los 498 casos confirmados a esa fecha, el 11,44 por ciento de los casos corresponden a personal que ha contraído la enfermedad en algún centro de salud.

Con estos números, presidente, y atendiendo a la preocupación que a través de distintos proyectos nuestro bloque ha manifestado sobre esta cuestión, cuidar a quienes nos cuidan, es que damos nuestro voto positivo a la presente adhesión.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar algunas cuestiones que, sin dudas, se relacionan con el tema en tratamiento, y tienen que ver con las numerosas deudas que tenemos y a las cuales algunos legisladores ya se han referido, en general, con el sistema de salud público provincial y con su recurso humano en particular, porque a nuestro criterio, estas cuestiones de fondo son las que esta pandemia nos pone sobre la mesa y a las que debemos dar respuestas urgentes. Digo deudas sin desconocer las numerosas obras y equipamientos que se han construido o instalado en los últimos años, también reconociendo los esfuerzos que se han hecho en este último tiempo para poner en funcionamiento y en condiciones el sistema de salud, de modo tal que pueda dar respuesta, en especial, a las camas críticas que la demanda de casos pudiera requerir.

Me voy a referir, señor presidente, a tres cuestiones: presupuesto, infraestructura y recursos humanos en salud.

En relación al presupuesto de Salud, podemos decir que desde el año 2015 a la fecha, el mismo viene disminuyendo en relación al total del presupuesto

Provincial; mientras que en el 2015 representó el 11,20 del total del Presupuesto, en el 2016 el 10,65; en el 2017 el 9,09; en el 2018 el 9,70 por ciento. Según el informe publicado por La Voz del Interior, la ejecución presupuestaria de 2019 precisa que el año pasado la inversión en salud representó el 7,8 por ciento del total de los recursos del Estado provincial; el porcentaje es el más bajo de la última década.

En infraestructura, señor presidente, vemos un Gobierno demasiado afecto a hacer anuncios en temas de salud, en especial en momentos preelectorales, anuncios de obras que tardan décadas en concretarse o luego, lamentablemente, no se concretan. Fíjese que, a partir de 2007 en que se prometió por primera vez el Hospital del noreste, en avenida Japón y Juan B. Justo, en la capital provincial, el mismo se volvió a prometer también en 2011, en 2015 y en la última campaña electoral. Tuvo que pasar esta trágica pandemia para que, finalmente, abriera sus puertas, hace pocos meses, ya avanzado el año 2020.

En 2017, también, en medio de las PASO, se prometió el Hospital de barrio Los Filtros de Córdoba capital, con un plazo de ejecución de un año y medio; hoy también, a raíz de esta difícil circunstancia que nos toca atravesar, se han empezado a acelerar las obras que estaban paralizadas. Luego de prometerse en el 2013, 2014, 2015 y 2016 la ampliación de la Maternidad Provincial, que nunca se concretó, en 2017 se promete la nueva Maternidad Provincial, con impresionantes renders que se encuentran en la Web y que nos hicieron soñar con este increíble edificio, que ya debería estar funcionando en los predios del Pizzurno. También -y no porque se agote acá la lista- es que, a mi criterio, corrió el peor de los destinos el nuevo Hospital de Río Tercero, prometido convenientemente en la campaña electoral de 2007, el prometido en todas las campañas electorales que le sucedieron; todavía, señor presidente, la escucho a la legisladora Matar, período cumplido 2007-2011 y 2011-2015, reclamar por la conclusión de esta obra que, como bien dije, fue prometida en el año 2007; el legislador Fortuna es testigo que no ha habido reunión de la Comisión de Salud en que no manifestáramos nuestra preocupación por esta importante infraestructura de salud prometida año tras año y que aún hoy, trece años después, no encuentra conclusión.

En relación a los recursos humanos, señor presidente, de acuerdo con los datos oficiales, en la plantilla de trabajadores estatales -el Gobierno de Córdoba informa al Ministerio de Economía de la Nación- el año pasado había 11.631 profesionales -técnicos y empleados- en los hospitales provinciales. La cifra es la más baja de los últimos tres años. El sector público habría perdido casi dos mil puestos de trabajo entre 2013 y 2019.

Por otra parte, sabemos -y así lo confirman distintos estudios recientes realizados a propósito de la actual pandemia- que los profesionales de la salud en Argentina y, por ende, también en Córdoba, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran entre los peores a nivel mundial, y esta es la causa por la que muchos médicos y demás profesionales del equipo de salud brindan

atención en distintas instituciones de manera de incrementar sus ingresos, es lo que se conoce y que ya se ha descripto también acá como pluriempleo.

Así lo relataba, señor presidente, un profesional: “nosotros no elegimos andar a las corridas o cruzar como locos de una ciudad a otra, somos víctimas del pluriempleo, porque necesitamos trabajar en cuatro o seis lugares a la vez para cubrir nuestras necesidades básicas y familiares”.

Según datos del Consejo de Médicos, el 80 por ciento de los matriculados de Córdoba tiene más de un empleo; son 15.270 profesionales sobre un total de 19.032 que están inscriptos en la matrícula A; es decir, se desempeñan como autónomos en el sector privado y también pueden llegar a tener un trabajo estable en un hospital o una clínica.

Este grupo está integrado en su mayoría por monotributistas; “si no trabajamos no cobramos, olvidate de tener vacaciones”, relataba uno de los médicos –expresó esto un médico del hospital San Roque, que trabaja además en otros cinco lugares.

Este es el motivo por lo que el reciente anuncio del Gobierno de implementar un subsidio que viniera a paliar esta situación de pluriempleo no ha podido ponerse en práctica. Ciento de instituciones quedarían, lisa y llanamente, sin personal.

Además de todo lo descripto, tenemos también la desequilibrada distribución de los recursos humanos de salud entre la Capital y el interior -bien lo saben acá los legisladores que provienen de los distintos departamentos del interior provincial, en especial los del norte cordobés.

También, señor presidente, en relación a los recursos humanos, el análisis del sector salud con perspectiva de género que realizara recientemente la FEPUC, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, arroja datos muy preocupantes.

Fíjese que el 69,6 por ciento del empleo en el sector salud es femenino, pero tienen ingresos 41 por ciento más bajos que los hombres, y seis de cada diez mujeres del sector son sostén del hogar.

El valor del trabajo femenino se cotiza 20 por ciento por debajo del valor hora masculino. En relación a la enfermería, tarea tan fundamental en salud y prioritaria en estos momentos, se destaca el dato de que el 83 por ciento de las matriculadas son mujeres y en su amplia mayoría son sostén de familia.

En este caso, el ingreso de una enfermera con diez años de antigüedad es de unos 40 mil pesos. También acá encontramos el motivo principal por el cual el 65 por ciento de los matriculados en enfermería tienen pluriempleo.

En fin, señor presidente, la reciente marcha en caravana por las calles céntricas de la ciudad de Córdoba y las principales ciudades del interior bajo la

consigna “Ni héroes ni villanos, Médicos”, da cuenta del malestar de los profesionales y trabajadores de la salud, no sólo en repudio a la judicialización de sus prácticas profesionales sino también representando los reclamos en lo que se refiere a las condiciones económicas y de seguridad de sus condiciones laborales.

A todo esto, debe sumarse la crisis de los establecimientos privados de salud. Según el estudio del año 2018 de la Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba, existen actualmente 163 establecimientos privados de salud en la Provincia en relación a los 425 que existían en el año 2000. Tenemos 262 instituciones menos, lo que refleja que, en los últimos años, se ha reducido drásticamente el número de establecimientos privados.

Para terminar, señor presidente, por todo lo expuesto, con este pantallazo de la crítica situación del sector salud, esbozando también los temas que, a nuestro entender, son de prioritario tratamiento –como ya lo adelantáramos-, damos nuestro acompañamiento a la presente adhesión, pero no vamos a ser acompañantes pasivos, vamos a estar acá para recordar y controlar, sesión tras sesión, las deudas que aún nos quedan y los compromisos que hoy asumimos a través de esta legislación, honrando el rol que nos ha conferido la ciudadanía de Córdoba.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.

Sr. Fortuna.- Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, quiero agradecer el acompañamiento de todos los bloques a la sanción de este proyecto de ley, que se suma a las otras normas que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha venido sancionando en los últimos tiempos, fundamentalmente en este nuevo escenario de la pandemia del Covid-19, que nos afecta a los cordobeses, a los argentinos y, como lo hemos dicho en otras oportunidades, a todo el planeta y en un corto tiempo.

Sin duda, estos son momentos de incertidumbre, una enfermedad nueva que no tiene un tratamiento comprobado, que no existe tampoco ninguna vacuna para prevenirla. Esto, señor presidente, señores legisladores, ha generado, sin dudas, mucha incertidumbre. Pero creo que también ha generado certezas que son muy importantes, una de ellas tiene que ver con que el método más efectivo ha sido, precisamente, para poder prevenirla o poder mitigar o reducir sus consecuencias, el aislamiento que, sin duda, ha contribuido enormemente a su prevención. Y la segunda certeza, que también es incontrastable, es que si nos enfermamos tenemos un lugar donde acudir y, precisamente, en ese lugar encontramos al equipo de salud dispuesto a resolver y contribuir a disminuir los efectos de este virus desconocido y tan agresivo que hemos estado conociendo.

Por eso, señor presidente, la sanción de esta ley apunta fundamentalmente a proveernos de una nueva herramienta, sumándose a las herramientas que ya hemos venido sancionando en esta Legislatura y que el Poder Ejecutivo provincial, el Ministerio de Salud, el COE a nivel provincial, los equipos de salud a nivel de cada una de las unidades de atención primaria y de atención hospitalaria, también tanto el sector público o privado, han venido aportando en este proceso que todos conocemos y que estamos viviendo.

Para nosotros, y a esto lo quiero dejar muy en claro, señoras legisladoras y señores legisladores, la bioseguridad del equipo de Salud es una política de Estado; política de Estado que se viene llevando adelante en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que ha relevado el conocimiento efectivo de la práctica sanitaria durante muchos años, que se ha visto reflejada, además, en la sanción de resoluciones y decretos que hacen al funcionamiento del sistema sanitario, y que, sin duda, han cristalizado normas que nos han permitido a nosotros, en el ámbito del sistema sanitario de la Provincia de Córdoba, poder actuar con mayor eficacia frente a los desafíos nuevos y constantes que tenemos en el sistema de salud.

Este tiempo -también lo quiero remarcar- nos ha permitido organizar y readecuar el sistema sanitario provincial, teniendo como principal objetivo generar las herramientas que nos permitieran abordar con mayor eficiencia la posibilidad de cuidar a nuestra población frente a la amenaza del COVID-19, señor presidente, frente a la amenaza de esta enfermedad.

Quiero decirles, como pasó y como se puso de manifiesto en el día de ayer, que nos vinieron a visitar miembros del equipo de Salud, algunos que lo integran en el ámbito del COE, y otros que también se sumaron, que tienen que ver, precisamente, con las herramientas que se fueron creando para poder abordar con mayor eficiencia estos desafíos.

Sin ninguna duda, señor presidente, quiero remarcar que la principal preocupación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Salud de nuestra provincia, ha sido, precisamente, cuidar a los que nos cuidan, cuidar el capital humano, que es el principal recurso que tiene una sociedad organizada en un sistema de salud para dar respuesta a la enfermedad y para poderla prevenir, señor presidente.

En ese sentido, si aprobamos esta norma, seguramente, estaremos avanzando y dando un nuevo instrumento que nos va a servir para mejorar nuestra respuesta, pero que también va a ser un nuevo jalón sobre el cual aprender y sacar conclusiones para nuestro futuro.

Quiero manifestar que se ha creado -y quiero remarcarlo- una Mesa de Bioseguridad para el personal de la Salud que, en realidad, siempre estuvo funcionando, porque lo que también quiero dejar en claro es que, en la medida que han ido transcurriendo las semanas, los días, sin duda, se ha ido cristalizando la organización necesaria, como lo anticipamos cuando arrancamos con el primer

decreto, que luego ratificamos legislativamente, allá, por la segunda semana de marzo de este año, señor presidente.

En ese sentido, se han venido dando pasos; son todos pasos sucesivos que nos han ayudado a dar una mejor respuesta.

También, se creó un Comité de Bioética porque, sin duda, el abordaje de esta pandemia ha generado –como dije- incertidumbre y la necesidad de nuevas respuestas, sobre todo previendo una evolución en donde el Sistema de Salud, a nivel nacional o provincial, requiera resolver mayores tensiones.

Felizmente, hasta ahora, por la evolución y eficiencia de ese equipo de Salud, que ha estado trabajando a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Córdoba, hemos podido abordar exitosamente la respuesta a la pandemia, como lo demuestran los resultados; resultados de toda una comunidad de cordobeses, tanto de la Capital como del interior, y de todo un equipo de Salud, sin distinguos de niveles ni de responsabilidades, que ha estado a la altura de las circunstancias; si no, efectivamente, no tendríamos una provincia que, felizmente, tiene la inmensa mayoría de su superficie con un máximo control, donde, como venimos viendo, se puede ir flexibilizando y recuperando las actividades que hacen, precisamente, al funcionamiento de la comunidad, actividades productivas, de servicio, también aquellas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, aun en estas circunstancias excepcionales en las que nos toca vivir.

Por eso, quiero agradecer, enfáticamente, el trabajo de nuestras médicas y médicos, de nuestros enfermeros y enfermeras, bioquímicos, fisioterapeutas, especialistas que se preocupan diariamente, estando en la primera línea, batallando para tratar de dar la mejor respuesta a nuestra sociedad, a aquellas personas que se enferman.

También, quiero dejar en claro, señor presidente, como han dicho los legisladores que nos han precedido en el uso de la palabra, que el Equipo de Salud es especialmente vulnerable frente a este virus. Efectivamente, a pesar de que siempre estamos aprendiendo, insisto en que la preocupación principal del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo provincial ha sido la de llegar, en tiempo y en forma, con todos los elementos de protección personal, y la de ir organizando, de la manera más efectiva, la atención de una epidemia desconocida, que nos hace pensar en lo que significa la recepción de la persona que viene a hacer una consulta en el territorio, en un consultorio, o de aquella que requiere de algún nivel de internación en el sistema sanitario, o de aquella que requiere de la máxima complejidad en lo que hace a la prestación de los servicios.

Para todo eso, señor presidente, ha habido una respuesta, precisamente, de la mano, del compromiso, de la pasión que pone el equipo de Salud en lo que hace a la solución de estos temas que, a veces, no es reconocida o puede ser malinterpretada por la comunidad que, sin lugar a duda, tiene que aprender de estas cuestiones, en las que nosotros también contribuimos para tratar de ir sacando una mejor experiencia, para que nuestros médicos, nuestras enfermeras,

el Equipo de Salud, tenga el reconocimiento merecido, sobre todo el reconocimiento que se expresa en los hechos, a través del compromiso –insisto– que tenemos, desde el Gobierno provincial, de acompañar a todo el Equipo de Salud, en todos los aspectos nuevos y desconocidos que hacen a la atención de esta pandemia.

Señor presidente: quiero remarcar que este es un paso más que estamos dando y agradecerles, enfáticamente, a los señores legisladores y a las señoras legisladoras de todos los bloques que, aun teniendo opiniones, a lo mejor, diferentes, o pensando de una manera crítica, en función de las cosas que se están haciendo desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, hoy nos hayan dado su acompañamiento unánime en la sanción de este proyecto de ley que también tiene que ver con un compromiso de este Poder Legislativo con todo el sistema sanitario provincial.

Quiero agradecer a las Comisiones de Salud y de Legislación General, y a todo el equipo del COE, como así también del Ministerio de Salud, que estuvieron prestos para trabajar, para traer la información, y también darle el tratamiento correspondiente y hacerlo poniendo el eje en lo fundamental, que es contar con las herramientas necesarias en los momentos oportunos. En ese sentido, creo que también este Poder Legislativo ha dado un excelente ejemplo con el acompañamiento en el tratamiento y sanción de esta ley.

Para terminar, señor presidente, quiero pedir el cierre del debate y, además, por supuesto, reafirmar el acompañamiento de nuestro bloque, Hacemos por Córdoba, a la sanción de este proyecto de ley que hoy está en tratamiento.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.

En consideración el cierre del debate propuesto por el legislador Fortuna.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.

En consideración en general y particular, en una misma votación, el proyecto de ley 30555/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado por unanimidad en general y particular; de acuerdo a la exposición que ha realizado cada uno de los bloques, también resulta aprobado.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-6-

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 30518, 30561, 30564, 30565, 30568, 30574, 30576, 30577, 30579, 30580, 30582 y 30583/L/20, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

– Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-5-

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 30546, 30560 y 30570/L/2020, que cuentan con pedidos de tratamiento sobre tablas, que serán leídos a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): "Solicitud de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 30546/L2020, por el que la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su repudio ante el anuncio del Gobierno Nacional, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, para la expropiación de la empresa privada Vicentín.

Legisladora Cecilia Irazusta.

Solicitud de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 30560/L/2020, por el que la Legislatura de la Provincia de Córdoba resuelve, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inciso 5º, de la Constitución provincial, instruir a senadores nacionales y solicitar a los diputados nacionales por Córdoba a que se realicen las gestiones pertinentes ante el Congreso nacional para que recupere para sí las

competencias que le son propias en materia de expropiaciones y para que el Poder Ejecutivo Nacional no se arrogue para sí las facultades propias del Congreso, en el caso de la sociedad Vicentín SAIC.

Legisladores Silvia Paleo, Darío Capitani, Patricia De Ferrari Rueda, Elisa Cafarratti, Daniela Gudiño, Raúl Recalde.

Solicitud de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 30570/L/2020, por el que la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara la conveniencia de instruir a los senadores en representación de la Provincia de Córdoba ante el Honorable Senado de la Nación a expresar su rechazo a la expropiación de la empresa Vicentín.

Legisladores Marcelo Cossar, Benigno Rins, Verónica Garade de Panetta, Dante Rossi, Marisa Carrillo”.

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas que acaban de ser leídas por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Para realizar una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora De Ferrari; dispone de cinco minutos.

Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.

Tal como lo dice el proyecto de resolución, estamos pidiendo que en virtud del artículo 104 se instruya a los senadores por Córdoba y que se les solicite a los diputados nacionales, para que Congreso Nacional recupere para sí las competencias que le son propias en materia de expropiación.

Hemos esgrimido para ello razones constitucionales, legales, razones por experiencia y por cuestiones económicas y políticas, y por el sentido que tienen para Córdoba. En referencia a la Constitución, tenemos los artículos 17; 18; 99, inciso 3, respecto a las competencias del Poder Ejecutivo; el 109 en la prohibición de ejercer funciones judiciales al Poder Ejecutivo, así como el artículo 18 y, referido a las Leyes de Sociedades, la 19550 y la 24522 de Concursos y Quiebras y, por supuesto, la crítica a la 21499 firmada por el dictador Videla.

Entendemos que este DNU, además, no se justifica en absoluto para que sea utilizado como una materia para avanzar sobre la cuestión de Vicentín.

La experiencia nos indica, acerca de las estatizaciones y expropiaciones, que han sido totalmente ruinosas para la Argentina; no nos olvidemos que las penurias por la deuda externa arrancan en los años '80 con la estatización de las deudas privadas y, después, nunca más pudimos enderezarnos en ese aspecto. Más acá en el tiempo, a partir de que es el modelo aludido por el Gobierno nacional sobre la estatización de YPF, no nos olvidemos de los juicios que aún restan y que hemos pagado una empresa tres veces más cara de lo que vale

ahora, y que los reclamos abiertos por haber sido mal hecha siguen generando deudas a pagar por todos los argentinos.

Respecto a la experiencia de cuidar el empleo, más allá de las declaraciones a favor de mantener el empleo, señor presidente, una empresa necesita condiciones favorables para su funcionamiento y de más pericia para hacerlo. Nosotros necesitamos que la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos y la producción sean respetados, pero no alcanza solamente la mera declaración de querer cuidar los empleos.

Hoy, el Gobierno nacional ha debido despedir a cerca de 1800 trabajadores en Vaca Muerta, quedando 1700 en una lista a punto de quedar en la calle. La credibilidad del Gobierno es que hay un default, y mientras niega un pago de 500 millones de dólares en bonos, compromete un gasto de 1300 millones por Vicentín; ese no puede ser más que un cuento, teniendo en cuenta que no pueden pagar de un solo saque salarios y aguinaldos.

Uno sabe en el interior, señor presidente, que a una empresa le va mejor cuanto más produce y más lejos vende su producción, y entendemos que esta no es claramente la salida.

Además, vemos las evasivas del Gobierno provincial tratando de que no se note que han cobrado un crédito que vamos a pagar todos los cordobeses. Y los cordobeses, ¿qué es lo que queremos? Una solución acorde a la situación, que se respeten a los proveedores, que se respeten las fuentes de trabajo, que se cuiden las inversiones, el sistema de seguridad jurídica, que se defienda el federalismo y las autonomías provinciales. De ninguna manera queremos el silencio que está manteniendo hoy el Gobierno de la Provincia, que mantenga los atropellos del poder nacional hacia Córdoba, que aparezcan cómplices de este despojo y que, además, queden como cómplices de especuladores políticos y de una confiscación disfrazada de rescate.

Pedimos, señor presidente, que esta canallada no sea parte de la política de Córdoba y que, realmente, nos cuidemos todos los cordobeses teniendo una actitud que sea mucho más madura y más cercana a la legalidad y constitucionalidad de lo que se nos está planteando desde el poder central.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.

La moción de reconsideración del proyecto presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical va a ser dividido entre la legisladora Garade Panetta y el legislador Cossar.

Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.

Sra. Garade Panetta.- Señor presidente: vengo a manifestar la necesidad de la reconsideración del proyecto presentado, toda vez que la intervención y expropiación de la sociedad Vicentín constituye uno de los más grandes atropellos a las instituciones democráticas y a la vigencia de los derechos y principios amparados por nuestra Constitución Provincial que jamás desde nuestro partido podremos avalar.

Esta impronta intervencionista y expropiatoria del Gobierno kirchnerista no es la primera, ya que existen varias compañías privadas que fueron expropiadas, Correo Argentino en el 2003, Aerolíneas Argentinas en el 2008, YPF y Ciccone en el 2012. En estos dos últimos casos se utilizó la figura de la expropiación, en YPF se pretendió justificarla con la denominada “soberanía de los hidrocarburos”, y en idéntico sentido, en Vicentín, se lo hace con la denominación de “soberanía alimentaria”.

No podemos dejar de mencionar que, para justificar este atropello institucional, se invoca una norma de la dictadura militar, de la época de Rafael Videla.

Pero, más allá de lo paradójico de esta cuestión, resulta una clara intromisión del Poder Ejecutivo, y en particular del Presidente, en el Poder Judicial, toda vez que existe un tribunal concursal abocado al conocimiento de la crisis económica y financiera, al estado de cesación de pagos e impotencia patrimonial de la empresa Vicentín. Estas palabras, que parecen tan serias, como cesación de pagos o impotencia patrimonial, son los requisitos legales que establece la Ley 24.522 como condición para la apertura del proceso concursal. Es decir que en toda empresa concursada se da esta situación, no difiere de lo que sucede en cualquier empresa en concurso preventivo y ello, por sí mismo, no legitima ni su intervención, ni menos su expropiación y ocupación de la sociedad, como expresa el DNU presidencial.

El juez concursal competente de Santa Fe actuó conforme a las prescripciones de la Ley 24.522, que es una ley declarada de orden público, conduce un proceso judicial de carácter universal, porque importa la suspensión de los intereses, la suspensión de las causas judiciales en contra de la sociedad concursada y el deber de todos los acreedores de concurrir a ese proceso a que se les reconozcan sus pedidos.

Esta Ley entroniza al juez del concurso y lo denomina el director del proceso, con las más amplias facultades. Éste cuenta con un amplio abanico de soluciones a los fines de la superación de la crisis de la empresa concursada, que van desde el denominado cramdown, o propuesta de pago por un tercero, hasta la continuidad de la empresa en marcha con cooperativas que exploten en la empresa, soluciones que garanticen la continuidad de la explotación y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Es decir, el Poder Judicial, y en particular el Tribunal Concursal, cuentan con las más amplias facultades y todas las soluciones legales en el marco de la ley para superar esta crisis...

Sr. Presidente (González).- Perdóneme, señora legisladora: ¿usted va a usar los cinco minutos?, porque si no, lo va a dejar sin tiempo al legislador Cossar. Voy a hacer cumplir el Reglamento de los cinco minutos, luego usted ocupe el tiempo que quiera.

Sra. Garade Panetta.- Bueno, si van a hacer cumplir el Reglamento de los dos minutos y medio, sólo voy a decir que es una actuación inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional que se pretende avalar, y abogamos por el respeto de las instituciones judiciales, su competencia y jurisdicción y por el respeto irrestricto de las leyes de orden público.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cossar.

Sr. Cossar.- Señor presidente: iré bien rápido para no excederme en el tiempo de que dispongo.

Pedimos que se reconsidere este proyecto, de manera tal que podamos votar favorablemente e instruir a los diputados y senadores nacionales para que voten en contra de la intervención y expropiación de Vicentín.

¿Por qué pedimos esto, señor presidente? Los argumentos que esgrime el Gobierno nacional –el kirchnerismo nacional– para haber decretado esta intervención, aun estando la empresa en concurso, es que hay una administración ruinosa y un sobreendeudamiento en pesos y en moneda extranjera. Si uno tuviese que resumir, diría: “mala praxis”. El kirchnerismo dice: “che, vamos a intervenir y expropiar esta empresa porque hay mala praxis”.

Ahora bien, ¿ustedes creen que las retenciones –que en su momento impuso el Gobierno– y los precios con que los agroexportadores liquidan sus cosechas en dólares, no condicionan la viabilidad de la empresa? ¿Acaso las sucesivas devaluaciones de nuestra moneda no impactaron tanto en las empresas privadas como en las cuentas públicas?

Mire, señor presidente, se especula y se dice –será casi una certeza– que, a posteriori de la pandemia, van a ser miles las empresas de distintos tamaños que van a entrar en concurso preventivo. Entonces, este Gobierno nacional,

profundamente kirchnerista, ¿piensa tomar idénticas medidas con todas?, ¿por qué no lo hacen con OCA, la empresa de Hugo Moyano, que debe cifras siderales en concepto de aportes a la AFIP?, ¿qué pasaría –miren lo que les pregunto– si el kirchnerismo decide intervenir Córdoba, debido a que nuestra Provincia tiene una sobredeuda en moneda extranjera y, de hecho, tuvo que pedir un crédito de 5.000 millones de pesos para pagar los salarios?

Entonces, ¿qué pasaría?, ¿qué diríamos? Mi partido sería el primero en decir: “¡Es absurdo, es inconstitucional, es inadmisible!”. Y seguramente que todos los legisladores, sin distinción de partidos políticos, dirían lo mismo. Bueno, con Vicentín pasa absolutamente lo mismo: es absurdo, es inconstitucional, es inadmisible.

Por eso, señor presidente, lo que le estamos pidiendo al Gobernador de Córdoba, fundamentalmente, es que le diga al senador y a los cuatro diputados nacionales que tiene Hacemos por Córdoba que, si son de Córdoba, si realmente piensan en Córdoba, voten en contra de esta expropiación autoritaria que quieren llevar adelante con Vicentín.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.

Sra. Irazuzta.- Señor presidente: desde nuestro bloque de Colación Cívica ARI, presentamos un proyecto de declaración de repudio y preocupación por la intervención de la empresa privada Vicentín.

Para hablar del tema que nos ocupa –la anunciada expropiación de Vicentín–, es necesario refrescar ciertos números. Argentina cumple un rol importantísimo en la comercialización mundial de granos y de carne. Somos el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, y el sexto exportador mundial de carne vacuna. Nuestro sector agroindustrial aporta, en su exportación, 40.000 millones de un total de 65.000 millones de dólares. En ese marco, por ejemplo, 60.000 productores sojeros producen 50 millones de toneladas de soja, lo que equivale, más o menos –como para tener una referencia de la importancia que tiene esta producción–, a 3 millones de camiones de doble eje.

Vicentín, en el marco de todos estos números, se presenta como una de las diez mayores empresas de nuestro país. Para Córdoba –así como para las demás provincias de la Región Centro–, es de vital importancia económica y productiva que sus gobiernos defiendan el sector más dinámico y pujante de la Argentina.

Para esta Legislatura, es importante conocer que Vicentín debe 5.200 millones de pesos a 519 acreedores cordobeses, con una deuda promedio de 10 millones de pesos por cada uno. ¿Qué sucederá con estos acreedores, que en su

mayoría son productores, acopios y cooperativas?, ¿es que el Estado, nuevamente, se va a hacer cargo de las deudas de los privados?

El atropello a este sector y a la propiedad privada es una falta grave a la seguridad jurídica de nuestro país. La preocupación de la ciudadanía es el atropello a este sector productivo y a la propiedad privada, implicando una falta grave a la seguridad jurídica de nuestro país.

Argentina se debilita en términos institucionales, ¿y qué ha pasado? Hay un hecho que preocupa a la ciudadanía y a nuestros representados: es que el 9 de junio el Gobierno nacional intervino, de manera ilegal e inconstitucional, la empresa Vicentín, designando como interventor al señor Roberto Gabriel Delgado, en un claro avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020. Esta intromisión, a todas luces prematura, se hizo en una empresa que aún intentaba reestructurar sus compromisos financieros.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de Reconquista resolvió, el 6 de marzo del corriente año, la apertura del concurso de acreedores para renegociar la deuda de dicha empresa. Bien explicó la legisladora Garade Panetta cuál es la operatoria y las atribuciones del juez. Sabemos que es de exclusiva atribución del tribunal actuante la designación de cualquier interventor, por lo que insistimos en la improcedencia legal del Poder Ejecutivo en su accionar.

Los plazos de esta convocatoria de acreedores se extenderían hasta el 25 de agosto de 2020, por lo que esta intervención interrumpe el proceso judicial iniciado y sienta un precedente preocupante para cualquier empresa que se encuentre en similares circunstancias.

Desde la Coalición Cívica ARI siempre hemos defendido los valores republicanos, la división de Poderes y el respeto a la Constitución nacional, claramente atacada. Pido especialmente a mis pares, tanto de la oposición como del oficialismo, que acompañemos el repudio de la Legislatura a esta intervención del Poder Ejecutivo en otro Poder del Estado.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

En consideración las mociones de reconsideración planteadas por las legisladoras De Ferrari Rueda, Garade Panetta e Irazuzta.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 30471, 30573 y 30575/L/20, con una solicitud de tratamiento sobre tablas.

Por Secretaría se dará lectura a la nota.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): "Se solicita el tratamiento sobre tablas de los siguientes proyectos: proyecto de resolución 30471/L/20, pedido de informes sobre el Programa DEMO, de Seguridad Barrial, presentado por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba; proyecto de resolución 30573/L/20, pedido de informes sobre la ola de inseguridad en distintas ciudades de la provincia, también presentado por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba; y proyecto de resolución 30575/L/20, pedido de informes sobre subejecución de programas de reparación y construcción de edificios de la Policía y mantenimiento de móviles policiales, también firmado por los legisladores del bloque Encuentro Vecinal Córdoba".

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas de los proyectos enunciados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Legislador García Elorrio: tiene la palabra para plantear la moción de reconsideración.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: acá tenemos un problema con la seguridad, y no es un problema de Encuentro Vecinal Córdoba, sino que es un problema que tenemos 3.600.000 cordobeses. No por esconderlo o no querer asumirlo el problema va a desaparecer, el problema sigue estando allí. Mañana, cuando abramos los diarios, lo vamos a volver a encontrar, pasado mañana lo vamos a volver a encontrar, pasado de pasado mañana lo vamos a volver a encontrar, y acá lo ignoramos, como si el problema no existiera.

No quiero responsabilizar al Gobierno de que el problema exista ¿está claro?, porque estos "barros" que tenemos ahora se hicieron con "tierra" de décadas de injusticia en nuestra Patria que, evidentemente, muestran que la dirigencia política no hemos sido capaces de resolverlo. Pero el problema está.

Refiriéndome al proyecto 30471, quiero recordar que nosotros nos opusimos a los Consejos de Seguridad Barrial porque consideramos que no era el mejor esquema para Córdoba. Pero, bueno, el pueblo los había votado a ustedes y ustedes lanzaron ese plan de seguridad barrial, a través de un sistema de

cuadrantes, supongo que en Córdoba y en otras ciudades. Me consta que en Córdoba lo han implementado o lo han intentado implementar. Asignaron, para este año, 52 millones de pesos para gastar en esto, y hasta hoy parece que no han gastado nada.

¿Cuál era el problema con los Consejos Barriales? Que ustedes tienen un esquema, y la situación básica que hay en las barriadas humildes de Córdoba es que la droga está en toda la ciudad y en todos los sectores. Allí, encuentran un problema especial: que los chicos, los jóvenes que se drogan, carecen de recursos para comprar la droga, a diferencia de otros sectores de la ciudad.

¿Qué ocasiona eso? Que se terminan robando entre ellos, se terminan matando entre ellos. Fíjense lo pavorosa que fue la conmoción que se produjo en la sociedad de donde vivía la mujer -en barrio Congreso, en la zona de Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad- a la que mataron porque se le rompió el auto, simplemente por eso, a las 5 y media de la mañana; gente que iba a trabajar, esforzada, que iba a lucharla, que encima era personal esencial de Salud – trabajaba en la higienización del Cardiológico- a la que alguien, muy dado vuelta, la mató.

Pero, en toda la ciudad ocurre esto, en toda la ciudad Capital está esto.

A ver, los Consejos Barriales, que fue la propuesta de asociar la comunidad a la seguridad, se ve que no están funcionando, porque ustedes no le están imponiendo un peso a ese sistema, como lo demuestra este pedido de informes.

Después, existen denuncias de hechos delictivos en el último mes de mayo. Queríamos saber, porque vemos la ola delictiva y porque las fuerzas de seguridad cuando quieren imponerse lo hacen, ¿por qué no se imponen en la venta de droga al menudeo?

La semana pasada vimos aquí, cuando dimos el acuerdo para la designación de la señora Clarisa, que, junto con su designación, una fuerza de 400 miembros había descabezado a 14 de sus mejores cuadros; que la provincia todavía no tiene un Fiscal General, que no hay forma de dirigir la política antidroga de la provincia.

O sea, parecería que en lo único que la vamos pegando, señor presidente, es con la cuestión de la prevención, en lo que quiere hacer Gigena Parker. Pero esa es una parte de la cuestión sanitaria.

En infraestructura de Salud para atender a estos miles de chicos que se están enfermando no avanzamos.

En la cuestión de reprimir el narcotráfico, por lo menos alejarles un poco la droga a los chicos, tampoco funciona. Estamos viendo que los crímenes son cada vez más violentos.

Y donde decididamente no hemos empezado a trabajar todavía es en el problema de la demanda de drogas; o sea, sistemas de protección de los chicos con los que no solamente les alejemos la droga, sino que les demos proyectos de vida.

Si ustedes debatieran esto me podrían contestar, pero ustedes no quieren debatir, ya tienen cerrada la Legislatura –está claro que la tienen cerrada-, la oposición nos hacemos hilacha para ver de qué forma podemos meter algunos de los temas que tienen que ver con la actualidad. Si ustedes se animaran a debatir, tendrían elementos para contestarnos; creo que podríamos debatir sobre estos Consejos de Seguridad Barriales, que ustedes dicen que han funcionado; las noticias parecen demostrar lo contrario; la gente en los barrios parece demostrar lo contrario.

En fin, ustedes dicen que con el PPP y con otros proyectos se va avanzando; si abrieran un debate, ¡qué lindo sería debatir estos temas en la Legislatura de la provincia Córdoba!

Desde hace 9 años insistimos en estos temas; hace 9 años les hemos propuesto un plan, un plan que no pasa ni por la represión –que es tema de las fuerzas de seguridad- ni por la cuestión sanitaria, porque ese es un tema que lo tiene que abordar el Estado a través de su presupuesto. Nosotros hemos propuesto un plan donde debe haber consejos regionales para que a cada chico de esta Provincia se le garantice que conozca su proyecto de vida; después, él solo se defenderá de todas las poderías que lo circundan.

Pero, ante tanta oferta de droga, ante tanta cosa que anda suelta, sobre todo en sectores donde hay más vulnerabilidad, el Estado debe prodigarse en sistemas para que todos los chicos de esta provincia tengan derecho a conocer su proyecto de vida. Un chico que conoce el proyecto de vida se defiende solo, administra su libertad, nos evitaría gastar plata en seguridad, nos evitaría gastar dinero en la cuestión sanitaria, que es inabordable. Hace 9 años que nuestro proyecto está en la Comisión de Adicciones y nunca, nunca, jamás, nunca, nunca, jamás, han tenido el mínimo gesto humano de, por lo menos, abrirlo y discutirlo.

La realidad les pega, les pega en la cabeza, les pega en la cabeza y nada parece conmoverlos.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Aurelio García Elorrio para los tres proyectos que fueron leídos por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-7-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 30571/L/20, con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído por Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): “Moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 30571/L/20, instando al Poder Ejecutivo a regularizar el pago del bono estímulo a los médicos residentes y concurrentes de la Provincia, estipulado para los trabajadores y trabajadoras de la Salud, en función del Decreto 315/20.
Firma la moción la legisladora Soledad Díaz García”.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Legisladora Díaz García: tiene la palabra para formular moción de reconsideración.

Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.

En nuestra Provincia, recién luego de dos meses -hay que decirlo- de una lucha intensa por parte del personal de Salud para que se cumplimentara con el pago del Bono Estímulo Nacional, finalmente, los trabajadores de Salud de la provincia han logrado cobrar la primera cuota de 5.000 pesos que estipula ese decreto nacional.

Sin embargo, nos damos con que los trabajadores de la Salud, médicos residentes y concurrentes, han sido arbitraria y discriminatoriamente excluidos de ese beneficio.

Cuando uno analiza la situación, lo más grave es que el único sector que ha sido excluido es justamente el que trabaja en los hospitales públicos de la Provincia, porque inclusive los residentes de las clínicas privadas lo recibieron. Los empresarios de la Salud privada se apresuraron a enviar los padrones para que, efectivamente, pudieran cobrar ese bono, pero resulta que no ha ocurrido de la misma manera desde las direcciones hospitalarias públicas.

Entonces, tenemos una situación en la que se demuestra, claramente, una afrenta no solamente contra este sector del personal de Salud, tan importante y clave en la lucha contra la pandemia, sino también una nueva afrenta a la salud pública en nuestra Provincia.

Y yo digo que se excluye a los pilares de la salud porque, inclusive, los propios residentes entienden que sin médicos residentes hoy no existe salud pública en nuestra Provincia, es este personal al que, bajo la excusa por parte de los gobiernos, tanto nacional como provinciales, establecen un régimen de formación académica o de especialización a través de la práctica laboral, de la práctica profesional, pero lo que realmente ocurre en los hospitales es una explotación laboral sin ningún tipo de precedente.

Hoy tenemos que estos médicos residentes trabajan hasta 36 horas por 35.000 pesos mensuales, que es lo que reciben como remuneración por lo que no es formación sino, lisa y llanamente, trabajo, porque estos residentes son el primer personal de salud que te recibe cuando vas a una guardia; es el primer personal de salud que te atiende cuando vas a alguna especialidad, son los que en este momento están en la primera línea de lucha contra la pandemia, porque realizan el triage, porque realizan el proceso de selección entre pacientes sospechosos; son los que están realizando el hisopado, son los que, además, les están poniendo el cuerpo a este Programa Identificar que ha lanzado este Gobierno provincial y que los lleva a recorrer los barrios.

Y lo más grave aún es que han estipulado un régimen en el que plantean a este sector de trabajadores la exclusividad de trabajo en el hospital donde realizan la residencia, cuando todo el mundo sabe que este sector no vive con 35.000 pesos y que tienen que hacer guardias en clínicas privadas, que tienen que continuar con el estudio y trabajar para llegar a fin de mes. Esa es la situación que viven los residentes de nuestra Provincia, son los que están haciéndose cargo de todas estas tareas y no han sido recibidos, y están siendo excluidos del bono nacional, estímulo que los reconoce y que los han incluido expresamente.

Entonces, resulta que -les comento- el 12 de junio este colectivo de residentes de la Provincia de Córdoba hizo una carta formal, dirigida a las direcciones hospitalarias de la Provincia y al jefe de capacitación y docencia de los hospitales, para que se les reconociera el derecho y, hasta el momento, no han recibido una respuesta formal.

Hoy se enteran y nos informan por los medios de comunicación que resulta que el Gobierno provincial respondería por ese bono, a título provincial, del que han sido excluidos, de manera arbitraria, por este mismo gobierno.

Bueno, la pregunta que nosotros hacemos es ¿cómo, cuándo y dónde se va a efectivizar el pago? Porque si estos trabajadores han esperado dos meses para recién percibir la primera cuota del bono nacional, lo que pregunto es, ahora que dicen que se va a hacer cargo la Provincia, si efectivamente lo van a hacer, porque lo que plantean es justamente que en la Provincia se harían cargo de

todos estos sectores no alcanzados por el bono nacional y, es claro que expresamente los ha excluido.

Quiero hacer una sola acotación, es que la Provincia dice que este bono provincial va a alcanzar al personal que trabaja en los hospitales y si va a responder también por aquellos, como los limpiadores, los camareros que hoy desarrollan tareas y son pilares de la salud pública en los hospitales, si efectivamente, también ellos lo cobrarán.

Esperamos una respuesta formal y nuevamente insistimos en el tratamiento de este proyecto.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, señora legisladora.

En consideración la moción de reconsideración planteada por la legisladora Díaz García.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-8-

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al proyecto 30572/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): "Se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración, firmado por la legisladora Luciana Echevarría, por el cual la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su repudio al accionar del Intendente de la Ciudad de Córdoba, que incurre en violación hacia los derechos laborales de las empleadas y empleados municipales".

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Legisladora Echevarría, tiene la palabra para una moción de reconsideración.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.

Probablemente, algún legislador podrá objetar el hecho de traer a este recinto un tema que compete al Municipio de Córdoba, pero creo que nadie puede dudar de la importancia que tiene para nuestra Provincia lo que pase en la Capital, teniendo en cuenta que en esta ciudad viven y trabajan más de la mitad de los cordobeses y cordobesas.

Además, se da otra particularidad, y es que después de muchos años, la ciudad es gobernada por el mismo signo político de la Provincia, por lo que cualquier parecido en las medidas unilaterales, inconsultas y arbitrarias contra los trabajadores y trabajadoras, no es mera coincidencia.

Está claro que la ciudad hace años viene destruida por malas gestiones, pero el PJ cordobés está avanzando en derechos de los trabajadores municipales que, lejos de ser el problema de las finanzas municipales -como nos quieren hacer creer-, sus tareas tienen una importancia trascendental y por eso, permanentemente, intentan reemplazarlos con tercerizaciones carísimas, abogados y trabajadores precarizados.

Parece que Llaryora encontró en la cuarentena la gran oportunidad para aplicar una reforma laboral a la cordobesa. En estas semanas recortó la jornada laboral y los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales, pasó a no remunerativos ítems salariales que, históricamente y producto de la lucha, estaban en blanco, y tenemos que tener en claro que estos recortes van en contra de nuestra Constitución y de toda la legislación laboral vigente. Ahora, dio de baja a jefaturas y chapas de inspectores de distintas áreas sin siquiera poder explicar cuáles fueron los criterios con los cuales se tomaron dichas decisiones y, no es algo menor, porque estas bajas implican que esos trabajadores van a cobrar casi la mitad de su sueldo.

Recién aprobamos proteger a los trabajadores de salud que están en la primera línea en este combate de la pandemia. El Municipio, lejos de eso, los castiga recortándoles los salarios, porque Llaryora miente en los medios cuando dice que a ellos no los toca. Los propios trabajadores municipales de la salud y la educación tuvieron que salir a mostrar los recibos de sueldo para dar cuenta de los descuentos y de los pagos en negro.

Pero, la reforma a la cordobesa no se queda ahí, porque Llaryora también avanza en la precarización laboral tomando como ejemplo, por supuesto, el Ejecutivo provincial que tiene años de experiencia en esto.

El cuerpo de servidores urbanos, ahora llamados “chalecos celestes” por este afán que tienen de pintar todo de su color político, son trabajadores que

tienen un salario miserable de 10.000 pesos, no tienen obra social, no tienen aporte ni derecho a la sindicalización, pero son obligados a llevar a cabo las tareas que son propias y permanentes de los trabajadores y trabajadores municipales. Es decir, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y de pobreza en la que viven vastos sectores de la población para hacerlos trabajar en condiciones deplorables y, al mismo tiempo, atacar a los trabajadores municipales.

Como si esto fuera poco, también en plena pandemia, pusieron en marcha a los promotores de convivencia, que se trata de abogados contratados por el Municipio de manera irregular, sin rendir concursos, en calidad de monotributistas, que tienen licencia para multar y, al mismo tiempo, acceder a las famosas cámaras que estuvimos discutiendo en la sesión anterior.

Entonces, estamos nuevamente ante modalidades precarias de contratación, con funciones laborales poco claras, que entran en contradicción con las tareas específicas de los trabajadores municipales y, lo peor de todo, es que todo este combo se hace bajo la excusa de recortar el abultado gasto público, pero esta austeridad no se evidencia en todo el creciente gasto publicitario desplegado por Llaryora en todos los medios de comunicación locales y también en las redes sociales; es realmente impresionante, no hay forma de ver algo en YouTube o en alguna otra red social sin que te aparezca la cara de Llaryora cada tres segundos.

Evidentemente, la intención no es el ahorro sino el ataque descarado a los trabajadores y trabajadoras municipales, que históricamente han sabido ponerle un freno a los intendentes de distintos signos políticos.

Hace instantes hubo una movilización afuera del Palacio 6 de Julio que fue reprimida por las fuerzas de seguridad y mañana va a haber una movilización que, seguramente, va a ser multitudinaria. Y quiero ser clara, el Gobierno municipal, en primer lugar, y el Gobierno provincial, en segundo lugar, van a ser responsables de lo que pase, porque no pueden llevarse a todo el mundo...

Sr. Presidente (González).- Legisladora, discúlpeme...

Sra. Echevarría.- Sí, con esto termino, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Bueno, de acuerdo.

Sra. Echevarría.- No pueden llevarse a todo el mundo por delante y pretender que todo siga como sin nada.

En este contexto, la Legislatura no puede estar ajena a esta cuestión. Por eso, insisto, en que se trate este tema en el día de hoy y que acompañen nuestro proyecto de declaración.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

En consideración la moción de reconsideración planteada.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión especial, voy a pedirle a la legisladora Luciana Echevarría que se acerque al mástil del recinto para arriar la Bandera nacional y a los demás legisladores ponerse de pie.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 32.

Graciela Maretto - Nora Mc Garry
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos